

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO

RESTRICTED

G/ADP/W/109

G/SCM/W/118

20 de octubre de 1995

(95-3181)

Comité de Prácticas Antidumping
Comité de Subvenciones y Medidas Compensatorias

Original: inglés

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS PRESENTADAS
POR EL GOBIERNO DEL CANADÁ¹ ACERCA DE
LAS NOTIFICACIONES DE LEYES Y
REGLAMENTOS DE AUSTRALIA²

Se ha recibido de la Misión Permanente de Australia la comunicación siguiente, de fecha 5 de octubre de 1995.

Pregunta 1. En relación con el párrafo 8) del artículo 269TAC de la Ley de Aduanas, relativo al valor normal de las mercancías, ¿quedan abarcados en las disposiciones sobre ajustes para la comparabilidad de los precios por diferencias en "las condiciones o circunstancias de las ventas" factores tales como los niveles comerciales, las cantidades, las características físicas y otras diferencias de las que también se demuestre que influyen en la comparabilidad de los precios, como se dispone en el párrafo 4 del artículo 2 del Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI?

Respuesta 1

De conformidad con el párrafo 8) del artículo 269TAC, el precio de venta en el mercado interno de los productos similares debe ajustarse para tomar en consideración todas las diferencias entre las condiciones y circunstancias de las ventas en el mercado interior y las de exportación. Los ajustes se efectúan para asegurar que ninguna diferencia afecte a la comparación entre el valor normal y el precio de exportación. La ley de Australia está formulada en términos amplios y, en consecuencia, no contiene una enumeración precisa. El apartado b) del párrafo citado dispone específicamente que se realice un ajuste en función de las "diferencias físicas". Otros factores, como el nivel comercial, la cantidad y otras diferencias, se tienen en cuenta como diferencias de las "condiciones y circunstancias de las ventas".

Pregunta 2. ¿Podría Australia aclarar si se permitirá a los usuarios industriales y a las organizaciones de consumidores facilitar cualquier información que sea pertinente para la investigación, como se requiere en el párrafo 12 del artículo 6 del Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI?

¹ G/ADP/W/27-G/SCM/W/34.

² G/ADP/N/1/AUS/1-G/SCM/N/1/AUS/1.

Respuesta 2

La ley de Australia no incluye referencias a los usuarios industriales ni a las organizaciones de consumidores representativas en la definición de las partes interesadas que figura en el párrafo 1) del artículo 269T. Esa definición se incluyó porque varias disposiciones exigen que en determinadas etapas de la investigación se entre en comunicación con los interesados y se les informe, en los siguientes casos:

- al iniciarse una investigación: en el aviso respectivo se invita a los interesados a que presenten comunicaciones, y los interesados pueden pedir una prórroga para presentarlas (269TC);
- cuando se revoca la decisión de poner fin a una investigación preliminar: los interesados pueden pedir que la comunicación que hayan formulado previamente sea tratada en la continuación de la investigación (artículo 269TF);
- al iniciarse una revisión: el aviso respectivo debe incluir una invitación a las partes interesadas a que presenten comunicaciones (párrafo 2) del artículo 269ZB);
- al término de una investigación: se debe notificar a las partes interesadas afectadas por la conclusión o decisión (párrafo 3) del artículo 269ZI);
- durante una investigación: las comunicaciones de las partes interesadas deben incorporarse en el expediente público. Se debe señalar a las partes interesadas la existencia del expediente público y debe dárseles acceso a él (artículo 269ZJ).

Ni en el párrafo 1) del artículo 269T, ni en ninguna otra disposición, se excluye a ninguna parte del derecho a presentar comunicaciones en una investigación.

Aunque los usuarios industriales y las organizaciones de consumidores representativas no figuran en la definición de "partes interesadas", no están impedidas de responder al aviso público de iniciación de la investigación, ni al de una indagación definitiva cuando se ha formulado una conclusión preliminar positiva. Si los usuarios industriales o las organizaciones de consumidores representativas presentan comunicaciones o cualquier otra información pertinente a una investigación, las autoridades están obligadas por los principios del derecho administrativo a tomar en consideración tales informaciones.

Al formular sus conclusiones preliminares, el Controlador debe (en virtud del párrafo 1) del artículo 269TD) tener en cuenta "todas las comunicaciones recibidas y todas las demás cuestiones que considere pertinentes".

Del mismo modo, en virtud del párrafo 6) del artículo 7 y el párrafo 7) del artículo 8A de la Ley sobre la Autoridad Antidumping de 1988, la Autoridad Antidumping, al decidir sobre las recomendaciones que ha de formular en su informe acerca de la publicación de un aviso de derecho antidumping o un aviso de derechos compensatorios, o del mantenimiento de tales avisos o de un compromiso, debe "tener en cuenta cualquier comunicación" que haya recibido.

En consecuencia, las autoridades de Australia deben tomar en consideración, en las investigaciones, las comunicaciones pertinentes formuladas por usuarios industriales o por organizadores de consumidores.

Pregunta 3. A efectos de la definición de "subvención sujeta a medidas compensatorias", el párrafo 6 del artículo 269TAAC considera excluida una subvención respecto de la cual el Ministro se haya cerciorado de que está comprendida en los apartados a), b) o c) del párrafo 2 del artículo 8 del Acuerdo sobre Subvenciones. Si el Ministro no tiene la certeza de que una subvención, debidamente notificada por un Miembro como no recurrible, de conformidad con el párrafo 3 del artículo 8 del Acuerdo sobre Subvenciones, es una "subvención excluida", ¿puede iniciarse una investigación con respecto a esa subvención, o exige la legislación australiana que se recurra al procedimiento previsto en los párrafos 4 y 5 del artículo 8 del Acuerdo sobre Subvenciones para determinar que la subvención en cuestión es, de hecho, una subvención sujeta a medidas compensatorias?

Respuesta 3

La determinación de si una subvención está excluida (no es recurrible) en virtud del párrafo 6) del artículo 269TAAC se verá facilitada por los procedimientos de notificación y examen de los párrafos 3 y 4 del artículo 8 del Acuerdo sobre Subvenciones. Australia, desde luego, habrá de proceder en conformidad con sus derechos y obligaciones respecto de las determinaciones previstas en los párrafos 4 y 5 del artículo 8. En particular, se tendrán en cuenta los resultados de las actuales deliberaciones sobre el párrafo 5 del artículo 8 acerca de los procedimientos aplicables al órgano de arbitraje. Aunque la legislación de Australia no excluye la posibilidad de una investigación sobre derechos compensatorios por la única razón de que se haya notificado un programa de subvenciones con arreglo al párrafo 3 del artículo 8, como esa notificación debe efectuarse antes de la puesta en práctica esta circunstancia parecería tener escasas consecuencias prácticas. Sin embargo, en el Acuerdo sobre Subvenciones resulta claro que, teóricamente, tal investigación puede realizarse antes de que se decida conforme a los párrafos 4 y 5 del artículo 8 si se cumplen o no las condiciones del párrafo 2.

Pregunta 4. ¿Tiene Australia la intención de incluir en su legislación disposiciones encaminadas a aplicar las decisiones de los grupos especiales establecidos por el OSD, y de no ser así, cuál será la base legal para adoptar una decisión de un grupo especial?

Respuesta 4

No existen proyectos para incluir disposiciones en la legislación nacional destinadas a aplicar las recomendaciones derivadas de la adopción de los informes de los grupos especiales establecidos por el OSD respecto del Acuerdo Antidumping y el Acuerdo sobre Subvenciones, ni respecto de ningún otro de los Acuerdos de la OMC. El Acuerdo sobre la OMC no está incorporado en el derecho interno de Australia. Si se adoptara un informe de un grupo especial referente a medidas aplicadas por Australia, correspondería al Gobierno de Australia decidir en qué forma se trataría la situación. Ello dependería en gran medida de la naturaleza del caso y no requeriría necesariamente una enmienda legislativa.